

C

Columna

Paulina Núñez Urrutia
Presidenta del Senado



Además de condenar hay que actuar

Hay dolores que no se pueden explicar. El asesinato de María Victoria Reyes, inspectora de un colegio de Calama, no solo nos golpea como país: nos rompe como comunidad. Una mujer que cuidaba, que acompañaba, que estaba ahí para proteger a nuestros niños, fue brutalmente atacada en el lugar que debía ser más seguro para todos. Ese día no falló solo una persona. Fallamos como Estado.

El ataque, que dejó además a varios estudiantes heridos, no fue impulsivo. Fue planificado, con intención de causar daño. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿qué no vimos?, ¿qué no prevenimos y por qué no fuimos capaces de evitarlo a tiempo?

Pero en medio de esa tragedia, hay algo que no podemos olvidar. Fueron los propios estudiantes quienes enfrentaron al agresor. Jóvenes que, en medio del caos, reaccionaron para proteger a otros. Ese gesto habla de humanidad, de coraje, de sentido de comunidad. Pero también nos interpela con fuerza: nunca debieron estar en esa situación. Nunca debieron arriesgar su vida para suplir lo que el Estado no logró garantizar. Como senadora por la Región de Antofagasta, este dolor es también mío. Calama no es una noticia más. Es una comunidad herida. Y por eso lo digo con claridad: no basta con condenar, hay que actuar.

Hace casi un año fui coautora de un proyecto que buscaba permitir la instalación de detectores de metales en los colegios. En ese momento, la discusión fue ideológica. Se dijo que podía estigmatizar a los estudiantes. Sin embargo, esa misma idea terminó incorporándose en la ley de convivencia escolar, que hoy es una realidad. Eso demuestra que muchas veces llegamos tarde a acuerdos que debieron haberse tomado antes, solo por razones ideológicas mezquinas. Hoy, además, vemos que el país

ha cambiado. La evidencia es clara. Según la encuesta Plaza Pública Cadem de esta semana, el 78% de las personas cree que lo ocurrido en Calama no es un hecho aislado, sino un problema generalizado, y existe un respaldo abrumador a medidas concretas: 86% apoya detectores de metales y 81% la revisión de mochilas en los colegios. La ciudadanía entendió algo que la política demoró en asumir: la seguridad es una condición básica para educar.

El gobierno ha reaccionado, y es justo decirlo. Ha anunciado medidas con las que estoy de acuerdo, como avanzar en la revisión de mochilas y fortalecer los controles de ingreso a los establecimientos, junto con acciones judiciales y apoyo a las comunidades afectadas. Pero como sociedad el desafío es ir más allá de la reacción. Tenemos que anticiparnos. Como presidenta del Senado, asumo esa responsabilidad. Voy a impulsar un acuerdo transversal, una reforma que esté a la altura de lo que hoy viven miles de familias en Chile. No se trata de una medida puntual, se trata de construir un sistema que prevenga, que proteja y que devuelva a nuestros niños la seguridad que han perdido.

Este no es un debate ideológico. Es un deber. Porque cuando un niño entra a un colegio, debe hacerlo con la certeza de que está protegido. Y cuando un profesor o asistente de la educación llega a su trabajo, debe tener la garantía de que volverá a su casa.

A la familia de María Victoria Reyes, a sus colegas, a los estudiantes que vivieron ese horror, les debemos algo más que palabras. Les debemos decisiones. Les debemos urgencia.

Porque si no actuamos ahora, no solo estaremos llegando tarde. Estaremos fallando de nuevo.